

BUENOS AIRES, 31 DE JULIO DE 1991

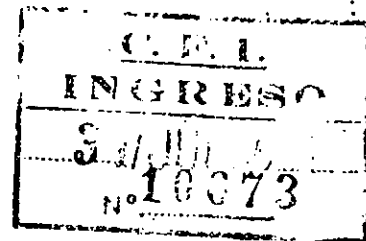
Señor

Secretario General del

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

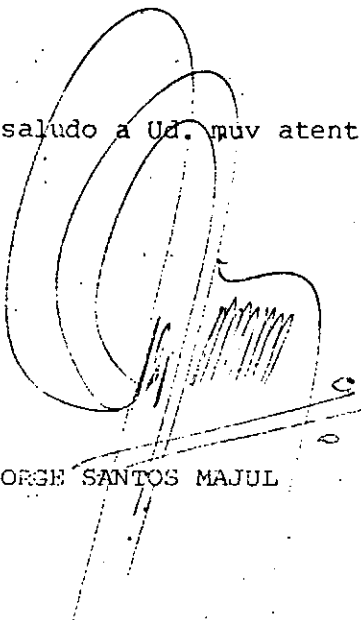
Ing. JUAN JOSE CIACERA

S/D.



Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de informarle que en la fecha hago entrega del PRIMER INFORME del estudio PERSPECTIVAS DEL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR).

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente.



JORGE SANTOS MAJUL

DOCUMENTACION ENTREGADA EN MANO AL LICENCIADO GUDMAN:

- 1) Original y tres copias del Tomo I: PRIMERA PARTE - UNIFICACION EUROPEA.
- 2) Original y tres copias del Tomo II: SEGUNDA PARTE - COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA.

Jorge Santo Majul

PRIMERA PARTE

UNIFICACION EUROPEA

INDICE

	<u>Página</u>
ORIGENES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA.....	1
OBJETIVOS DE LA UNIFICACION EUROPEA.....	11
METODOS DE LA UNIFICACION EUROPEA.....	14
BIBLIOGRAFIA.....	33

ORIGENES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se trató sobre todo de evitar la repetición de los conflictos que habían ensangrentado al Viejo Continente. La construcción del sistema europeo se fundó, entonces, en la reconciliación entre Francia y Alemania, es decir, entre los dos países que habían estado en la raíz misma del desencadenamiento de los dos conflictos mundiales.

Muy rápidamente, el desencadenamiento de la "guerra fría" entre oriente y occidente, proporcionó otra tonalidad a la construcción europea. Al apoderarse de los países de Europa central, la Unión Soviética les impidió beneficiarse de la ayuda de los Estados Unidos, aportada por el Plan Marshall, por lo tanto, la Comunidad Europea debía presentarse como un medio colectivo de responder al desafío del bloque comunista. Reducida a la parte occidental del continente se estructuró en el marco de la alianza atlántica y bajo la protección nuclear norteamericana.

Si bien la construcción del sistema europeo respondió inicialmente a una voluntad política, sus aspectos económicos fueron los que mostraron mayores progresos a lo largo de los años.

El ministro francés de asuntos exteriores, Robert Schumann, puso la primera piedra de la Comunidad Europea con su declaración del 9 de Mayo de 1950, en la que expuso el plan elaborado por él y Jean Monnet para integrar la totalidad de la producción franco-alemana de carbón y de acero bajo una "alta autoridad común", abierta a los demás países europeos. En la base de dicha propuesta estaba, por una parte, el reconocimiento de que tenía poco sentido someter a Alemania a un control exclusivo, pero por otra parte, la idea de una Alemania totalmente independiente seguía considerándose como una amenaza

potencial para la paz, de manera tal que la única solución era la integración política y económica de Alemania dentro de una Comunidad Europea con una sólida estructura.

El plan Schumann se hizo realidad con la firma del Tratado de París el 18 de Abril de 1951 y su posterior entrada en vigencia el 23 de Julio de 1952, a través del cual se crea la COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO (CECA) por los seis países fundadores: Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.

Los gobierno de los Estados miembros de la CECA eran concientes de que en interés propio debía proseguir el camino hacia una nueva Comunidad Europea, ya iniciada con el establecimiento de la CECA.

Para la República Federal de Alemania, la colaboración en esta labor de unificación significaba el retorno a la comunidad de Estados. Como país exportador, la República Federal de Alemania dependía y depende desde el punto de vista económico del mercado europeo. Con la creación de la Comunidad Económica Europea, este mercado se ha vuelto más seguro, de tal forma que la dependencia respecto del mercado exterior ha dejado de presentar tantos riesgos.

En cuanto a Francia, la creación de la Comunidad Europea, con la incorporación de Alemania Federal, significó la manifestación política de su disposición a la reconciliación y de su deseo de una paz duradera en Europa. Por otra parte, la pertenencia a la Comunidad Económica Europea ofrecía la oportunidad ventajosa de activar el desarrollo necesario y deseado de su industria. Asimismo, la incorporación a una gran zona económica europea abría a Francia nuevos mercados para sus productos agrícolas, mercados necesarios para hacer viable su agricultura.

Bélgica, al igual que la República Federal de Alemania, también depende económicamente del comercio exterior, o sea, de mercados seguros para la exportación. En consecuencia, Bélgica acogió favorablemente, desde el punto de vista económico, la idea del establecimiento de un mercado común. Este interés por una concentración económica aumentó tanto más cuanto que, en la década de los cincuenta, la economía belga se basaba casi exclusivamente en la industria del carbón y del acero. Por lo tanto, la posibilidad de un mercado interior no sólo era de gran importancia para una mejor salida de los productos industriales, sino que lo era, sobre todo, para la constitución y el desarrollo de nuevos sectores industriales.

Italia vió claramente las posibilidades de expansión que ofrecía el futuro mercado interior europeo, en el que Italia, que ya había realizado con éxito esfuerzos de industrialización, quería participar. A ello había que añadir la esperanza de obtener medios financieros para impulsar el desarrollo regional de las zonas atrasadas del país, dentro del plan de medidas de ayuda de la Comunidad, a fin de combatir de una manera eficaz las altas tasas de desempleo de esas regiones.

Del mismo modo, los Países Bajos esperaban que su participación en la labor de unificación europea daría nuevos impulsos a la industrialización a la que aspiraban. A los Países Bajos se les ofrecían también nuevas posibilidades, debido al papel preponderante en el flete de mercancías en Europa que permitían los grandes puertos holandeses y la buena infraestructura. Además, los Países Bajos se encontraban en la necesidad de afianzar y ampliar mercados para sus productos agrícolas.

La población acogió esta política con grandes reservas. Para los ciudadanos no era tan importante el beneficio económico como la garantía de paz en Europa y la posibilidad de poder visitar libremente y sin impedimentos los países vecinos.

Luxemburgo, debido a su situación geográfica, siempre se ha visto afectado a lo largo de su historia por las rivalidades entre las grandes naciones. En consecuencia, la política de unificación europea representa para Luxemburgo un medio con el que puede asegurar a la vez sus intereses políticos, económicos y sociales.

Con tal estado de intereses, los ministros de asuntos exteriores de los países fundadores de la CECA continuaron su labor de unificación europea con la Conferencia de Messina, partiendo de la misma base que había tenido la CECA, es decir, el campo económico. Los citados ministros encomendaron a un comité, que se reunió bajo la presidencia del ministro belga de asuntos exteriores, Spaak, la elaboración de un informe sobre las posibilidades de una integración progresiva.

En su primera parte, el Informe Spaak contenía un análisis de las ventajas derivables de la creación de un mercado común. Este análisis constituye una formulación teórica escueta de las bases racionales de la integración europea, que se abre con la misma idea que hacia 1955 estaba presente en todas las mentes europeas: la difícil posición de una Europa dividida, y situada entre unos Estados Unidos de América prósperos y un bloque socialista al Este cada vez más pujante.

Económicamente, el mercado común se entendía, ante todo, como el mecanismo más adecuado para evitar producciones antieconómicas. "En un mercado común, se decía en el Informe, los recursos son libres e igualmente accesibles a todos sus miembros, por tanto, las ventajas comparativas estarán determinadas cada vez menos por las condiciones naturales y cada vez más por la eficiencia de la empresa y de sus hombres... Por otra parte, el mercado común ha de permitir el acceso a las ventajas de la producción en gran escala, que sólo son posibles dentro de un amplio mercado plenamente competitivo, como el que

puede originarse con la desaparición de las barreras intracomunitarias".

Finalmente, en el Informe se ponía de relieve que el ideal del libre comercio sólo puede alcanzarse a través de la creación de un mercado común por un pequeño grupo de países.

En suma, en el Informe Spaak se subrayaban las razones políticas que aconsejaban la creación de un amplio mercado común europeo. Y se ponían de relieve sus ventajas económicas, fundamentalmente a través del óptimo aprovechamiento de los recursos y de las economías de escala, haciéndose hincapié, por último, en las grandes facilidades que al proceso integratorio habría de proporcionar la participación de sólo un reducido número de Estados.

En 1956 el Comité Spaak presentó su informe que sirvió de base para las negociaciones de los dos Tratados de Roma, que crearon la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE) y la COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGIA ATOMICA (CEEa o EURATOM). El 25 de Marzo de 1957 los seis Estados miembros de la CECA firmaron ambos tratados, los cuales entraron en vigor el 1 de Enero de 1958.

El Acta Unica Europea, firmada en Febrero de 1986, enmienda y completa dichos tratados. Expresa con precisión determinados objetivos de la Comunidad: perfeccionamiento del mercado interior europeo y realización, de aquí a 1992, de un gran espacio sin fronteras, desarrollo de las capacidades tecnológicas, progreso hacia la unión económica y monetaria, refuerzo de la cohesión económica y social, mejoramiento del medio ambiente y de las condiciones de trabajo. Este Acta comprende, igualmente, disposiciones que tienen como objetivo hacer más eficaz y más democrático el funcionamiento de la Comunidad, incluyendo además un anexo que institucionaliza la cooperación de los Estados miembros en el ámbito de la política extranjera.

Antes de la entrada en vigor de los dos Tratados de Roma, el Reino Unido tenía la idea de establecer una zona de libre intercambio, en la que se eliminaran los controles aduaneros entre los países miembros, pero que permitiera a los Estados miembros llevar a cabo de manera autónoma negociaciones político-económicas con terceros países, intento que fracasó ante la decisión de los seis Estados fundadores de la CECA. Otras iniciativas británicas para crear una gran zona europea de libre intercambio entre la CEE, ya existente, y los Estados restantes, miembros de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) creada en 1948, fracasaron de manera definitiva en 1958 debido a decididas diferencias de opinión entre Francia y el Reino Unido.

En contrapartida, en el año 1959 se creó la Asociación Europea de Libre Intercambio (AELI), organización de menor envergadura, la cual se encontraba integrada por el Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, Austria, Portugal, Islandia y Suiza, mientras que Finlandia se asoció.

El gobierno británico era consciente de que, únicamente con su papel dirigente dentro de la Commonwealth, no podría mantener su influencia en la escena política. Tampoco la AELI, cuyos objetivos son de carácter económico, a diferencia de la Comunidad Europea, que tiene además una orientación política, podía asegurarle un papel importante.

En esta tesitura el Reino Unido temía que si se mantenía alejado de la Comunidad corría el riesgo de quedarse aislado políticamente. A ello hay que añadir que el Reino Unido, al igual que todos los grandes países comerciales, se veía gravemente afectado por los cambios del comercio mundial, lo que le obligaba a tener que asegurar para sus productos los mercados ya existentes y a procurarse otros nuevos. Para ello, el mercado comunitario, que mostraba un crecimiento rápido, ofrecía también las mejores posibilidades. Igualmente, la Comunidad significaba

para las empresas británicas la oportunidad de movilizar sus fuerzas ante la difícil competencia de las empresas europeas y reanimar así el sector económico. En Agosto de 1961, el Reino Unido solicitó oficialmente su admisión en la Comunidad, para pasar a ser miembro de pleno derecho de la misma.

Otros dos Estados miembros de la AELI, Dinamarca y Noruega, y también Irlanda, siguieron el ejemplo del Reino Unido.

El interés de los países escandinavos por la participación en la Comunidad Europea se basaba en la convicción, de que, en una situación de libre intercambio en todas direcciones, ganarían más de lo que perderían. Con una producción de alimentos suficiente para satisfacer las necesidades de 15 millones de personas, lo que representa el triple de la población danesa, era vital para Dinamarca poder dar salida a sus exportaciones agrarias en un mercado interno comunitario sin trabas y a unos precios garantizados. Ello era tanto más importante cuanto que el Reino Unido, el mayor mercado de exportación con que contaba Dinamarca, también solicitaba su adhesión a la Comunidad Europea.

Al mismo tiempo, la existencia de un mercado común para productos industriales jugaba un papel muy importante, ya que, a largo plazo, iba a abrir nuevos caminos a la economía danesa. Durante los años en que Dinamarca había pertenecido a la AELI, se había comprobado que la industria sabía aprovechar las oportunidades que se le brindaban.

Irlanda mantenía tradicionalmente contactos estrechos y múltiples con el continente europeo, tanto de tipo cultural como religioso y militar. Mediante el ingreso en la Comunidad Europea, Irlanda esperaba un aumento de las posibilidades de exportación de sus productos agrícolas, hecho de importancia vital para el país.

El mercado inglés, hacia el que se orientaba el comercio irlandés en su mayor parte, no era por sí mismo suficiente para absorber el gran potencial de producción de la agricultura irlandesa. Por otra parte, la industrialización, iniciada a mediados de los años treinta, y que posteriormente originó una industria en vías de expansión, requería nuevos mercados. La capacidad competitiva de la economía irlandesa, que había aumentado paralelamente, permitía abrigar esperanzas de que la pertenencia al mercado común también originase beneficios en este sector, incrementase el comercio y elevara el nivel de vida.

Por último, otro elemento que era importante para los irlandeses en la pertenencia a la Comunidad eran los diversos fondos para el desarrollo económico y social, de los que Irlanda esperaba obtener ventajas económicas.

La entrada de estos países en la Comunidad fracasó en dos oportunidades, en los años 1963 y 1967, debido a la actitud recelosa de Francia con respecto al Reino Unido. La cuestión de la adhesión de los citados países sólo pudo plantearse definitivamente en el año 1969, después de la dimisión de de Gaulle, firmándose los Tratados de Adhesión el 22 de Junio de 1972 y haciéndose efectivo el ingreso del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca el 1 de Enero de 1973.

En el caso de Noruega fracasó el intento de adhesión, dado que, a través de un referéndum, la población noruega se manifestó en contra de la adhesión de su país a la Comunidad Europea.

Con referencia al resto de los países de la AELI, alguno de los cuales no querían entrar a formar parte de la Comunidad Europea por razones de neutralidad o debido a su sistema dictatorial, se llegó a una solución con la firma en Julio de 1972 de un Acuerdo de Libre Intercambio entre los Estados

miembros de la AELI y los de la Comunidad, incluyéndose dentro de la zona de libre intercambio a Noruega, visto el fracaso de su intento de adhesión.

Con la vuelta de la democracia, Grecia presentó su solicitud de adhesión en 1975, y Portugal y España en 1977.

Grecia esperaba que su ingreso en la Comunidad la llevaría ante todo a la estabilización de la estructura democrática que acababa de recobrar. Unida a ello, iba la esperanza de ganar prestigio internacional y jugar un papel más importante en la escena política internacional. Desde el punto de vista económico, Grecia confiaba en un saneamiento a largo plazo de su economía, con la modernización del sector industrial y agrícola. El 1 de Enero de 1981, Grecia se convirtió en el décimo Estado miembro de la Comunidad.

El 1 de Enero de 1986, después de la firma de los Tratados de Adhesión en Junio de 1985, y a pesar de todas las dificultades que tuvieron que superarse en el transcurso de las negociaciones, pudo llevarse a término, según los planes, la entrada de España y Portugal. España y Portugal son actualmente el undécimo y duodécimo Estados miembros, respectivamente, de la Comunidad Europea.

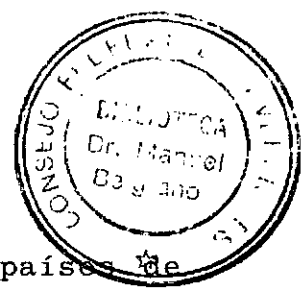
En materia de economía, la adhesión de España se traducirá particularmente en la activación de la agricultura, que es muy competitiva y cuenta con considerables reservas de producción. Dicha activación se logrará en gran parte con los medios de la Comunidad. Con su participación en los programas de desarrollo regional, España confía reducir las diferencias que existen entre el nivel de vida de las diversas regiones del país. En materia de política industrial, dada su situación de país desarrollado industrialmente, España estará en condiciones de iniciar el penoso pero necesario proceso de adaptación estructural con el apoyo de sus nuevos socios, de forma tal que

intentará superar el atraso que ha sufrido durante siglos frente a otras naciones del continente.

La Comunidad Europea ofrece a Portugal la posibilidad de liberarse definitivamente de su aislamiento político y la ocasión de sanear la economía del país. La confianza que se ha recobrado con la entrada en la Comunidad lleva a la reanimación de la actividad de inversión de las grandes empresas, necesarias sobre todo para el desarrollo industrial. Asimismo, en Portugal se confía en el apoyo y en el impulso de la Comunidad Europea, y no sólo mediante préstamos financieros, para realizar la reestructuración económica, necesaria en particular en el sector agrario.

Esta nueva ampliación no supone en modo alguno que el radio de extensión de la Comunidad haya llegado a sus límites. La Comunidad Europea ha adquirido mayor atractivo, sobre todo, a la vista de la creación del mercado interior antes de 1993. Así, Turquía y Austria han presentado ya su solicitud de adhesión, mientras que Malta y Chipre han expresado también claros deseos en ese sentido. El ingreso de cualquiera de dichos países exigirá sin duda bastante tiempo, ya que, tras el acceso de España y Portugal, la Comunidad se encuentra en una fase de consolidación y, además, antes debe llevarse a buen término la realización del mercado interior dentro de la Comunidad de los Doce.

En Febrero de 1982, la Comunidad tuvo que aceptar una reducción de su extensión cuando, en un referéndum, la población de Groenlandia, por escasa mayoría, se manifestó contraria a la permanencia de la isla en la Comunidad. La integración de Groenlandia en la Comunidad se hizo en 1973 y era consecuencia de su pertenencia a Dinamarca. El gobierno danés y la Comunidad llegaron en Febrero de 1984 a un acuerdo, según el cual se permitía a Groenlandia salir de la Comunidad, con efectos a partir del 1 de Enero de 1985 y, además, se le ofreció gozar a



partir de entonces de la misma situación que otros países de ultramar asociados con la Comunidad.

OBJETIVOS DE LA UNIFICACION EUROPEA

Los renovados esfuerzos en pro de una unificación europea después de la Segunda Guerra Mundial, se basaron en la convicción de que, únicamente la unificación puede poner punto final en Europa a la historia de guerras y de derramamiento de sangre, de sufrimientos y destrucción. Este hecho fundamental, ha marcado también el carácter de los Tratados Constitutivos de la Comunidad Europea.

Como objetivos primordiales se formulan la salvaguardia y la consolidación de la paz, la unificación económica en beneficio de todos los ciudadanos residentes en la Comunidad mediante la creación de una gran zona comercial y la lucha por la unidad política, sin olvidar el fomento y la consolidación de la cohesión social.

El plan Schumann, que llevó a la formación de la CECA, vió en la reconciliación franco-alemana el núcleo de una nueva conformación europea, y apuntó, de manera expresa, a la fijación de unas condiciones que hicieran cualquier guerra improbable, cuando no imposible. Tal objetivo se ha conseguido con la creación de la Comunidad Europea, ya que actualmente Europa occidental constituye una auténtica zona de paz, cuyo corazón es la Comunidad.

La unificación económica de la Comunidad se ha orientado hacia una mejora del nivel de vida, hacia la ausencia de paro y hacia la expansión económica. Estos objetivos económicos generales de la Comunidad Europea son válidos para todos los sectores económicos cubiertos por los tres Tratados Constitutivos.

La COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO debe velar para que se distribuyan racionalmente y con rendimiento máximo los productos del sector económico del carbón y del acero. Entre sus funciones se encuentran la de asegurar el abastecimiento de acero y carbón al mercado, la de regular los precios, la de mejorar las condiciones laborales y el nivel de vida de los trabajadores, la de fomentar el comercio y la inversión y, en estos últimos tiempos, la de adaptar la industria minera y siderúrgica de Europa a la nueva situación económica mundial.

La COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGIA ATOMICA se ocupa sólo, como la CECA, de una parte del sector industrial y económico de los Estados miembros. Su labor consiste en fomentar la creación y el desarrollo de la industria nuclear en los Estados miembros y en garantizar su suministro en materiales fisiónables.

Finalmente, la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA se ocupa, de manera general, de la integración económica. Partiendo de los mercados nacionales, cada uno de los cuales tiene un sistema diferente, debe nacer un gran mercado común en el que puedan circular las mercancías y las personas en las mismas condiciones que en un mercado nacional.

La unificación económica ha adquirido una nueva dimensión gracias al programa de realización del mercado interior antes de 1993, jurídicamente vinculante al estar reconocido en el Acta Unica Europea. Hasta ese momento, la Comunidad debe ir dotándose gradualmente de un ordenamiento económico integrado y coherente por el que se supriman los controles fronterizos y demás obstáculos y se garantice la libre circulación de personas, mercancías y servicios. Ya no se trata de actuar en un sector económico o en un campo concreto que resulten de especial interés para este o aquel Estado miembro, sino de eliminar todas las barreras físicas, técnicas y fiscales existentes que impidan el funcionamiento del mercado. Tampoco deben bastar unas normas mínimas, fácilmente asumibles por todos los Estados miembros,

sino que se trata de un nuevo punto de partida que exige concentrar los recursos económicos (mano de obra, capital, materiales e inversiones) allá donde puedan resultar de mayor provecho.

Aunque los Tratados Constitutivos sólo fijan en detalle los principios y medidas necesarias para el establecimiento del mercado común, la unificación económica no es finalidad en sí misma sino un estadio intermedio en el proceso de la unificación europea. En los preámbulos del Tratado de la CECA, se declara literalmente que, en primer lugar, se debe crear una "unión verdadera" mediante "acciones concretas" y que "el establecimiento de una Comunidad Económica" debe "colocar la primera piedra de una unión posterior más sólida entre los pueblos". Los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas contienen, por último, un componente social, en la medida en que establecen la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y la consolidación de la cohesión social comunitaria.

Este planteamiento se ha plasmado en las garantías jurídicas relativas a la libertad de establecimiento de trabajadores, profesionales liberales y empresas, al reconocimiento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la seguridad social de inmigrantes y emigrantes, a la formación profesional y a la creación de un fondo social. Estos principios deberán reformarse y perfeccionarse a la luz de la evolución del mercado interior, que no puede concebirse sin unas firmes garantías sociales. La realización de este proyecto no pasa exclusivamente por aumentar el crecimiento económico y la competitividad de las empresas europeas, sino que hay que garantizar un reparto justo de las ventajas y beneficios derivados del aprovechamiento del espacio económico europeo. Para ello, es imprescindible permitir que las fuerzas, que constituyen los fundamentos del funcionamiento del mercado interior, participen en los frutos que éste traiga consigo.

El espacio sin fronteras perdería cierto sentido si supusiera un menoscabo del nivel de vida y del grado de protección social de los ciudadanos de la Comunidad, mientras que, muy por el contrario, su justificación política y económica reside en las posibilidades del progreso social y en las ventajas que ofrece a todos los ciudadanos.

METODOS DE LA UNIFICACION EUROPEA

La unificación europea está marcada por concepciones diferentes de la colaboración entre los Estados europeos. Concepciones que pueden designarse como cooperación e integración.

La esencia de la cooperación es que, si bien los Estados están dispuestos a colaborar unos con otros superando sus fronteras nacionales, ello sólo es posible manteniendo intacto el principio de su soberanía nacional. Los esfuerzos de unificación basados en la cooperación no apuntan a la creación de un Estado colectivo, sino sólo a la integración de Estados soberanos dentro de una confederación de Estados en la cual se mantengan las estructuras nacionales.

El concepto de integración, por el contrario, rompe con la tradicional coexistencia de los Estados. La opinión tradicional de que la soberanía de los Estados es inviolable e indivisible, retrocede ante la convicción de que la insuficiencia de la convivencia humana y estatal, la propia insuficiencia de las estructuras nacionales y el abuso de poder de un Estado sobre otro, sólo pueden superarse si las soberanías nacionales se fusionan para crear una soberanía común y se agrupan dentro de una comunidad supranacional. El resultado de tal operación es la existencia de un Estado europeo federado en el que una autoridad común dirige el destino de las personas y les asegura el futuro, manteniendo a la vez la idiosincracia de cada una de las naciones constituyentes.

La Comunidad Europea es resultado de este concepto de integración, si bien la inercia de los Estados miembros en lo que afecta a su soberanía nacional ha hecho necesaria una modificación del mismo. Como los Estados miembros no estaban dispuestos a renunciar a su estructura nacional, recuperada y consolidada al término de la Segunda Guerra Mundial, en favor de un Estado europeo federado, hubo que buscar un compromiso que ofreciera algo más que una mera cooperación entre los Estados, y la solución consistía en la construcción progresiva de un puente que salvase la contradicción entre el mantenimiento de la independencia nacional y el Estado federal europeo.

A los Estados miembros no se les exige de inmediato la renuncia total a su soberanía, sino únicamente la renuncia al dogma de su indivisibilidad. Por lo tanto se trataba, en primer lugar, de establecer los campos en los que los Estados miembros estaban dispuestos a renunciar voluntariamente a una parte de su soberanía, en beneficio de una comunidad que estuviera por encima de todos ellos. Conforme con su objeto, los tres Tratados se limitan al sector de la economía, ya que a los Estados miembros les parecía el campo más razonable en el que podían renunciar a parte de su soberanía sin perder su esencia nacional.

El punto de partida de la unificación europea es, entonces, la creación de un mercado común y el progresivo acercamiento de las políticas económicas de los Estados miembros. Estos dos pilares fundamentales que sostienen la actividad comunitaria, son diferentes en su peso y su alcance, lo cual debe atribuirse al hecho de que, en el momento de la conclusión del Tratado, los Estados miembros tampoco estaban dispuestos, en materia de economía, a transferir de inmediato amplios poderes a la Comunidad Europea para que ésta ejerciera un control total sobre el proceso económico.

Con el fin de establecer el mercado común, se ha otorgado a la Comunidad Europea una autoridad de gran alcance para que pueda formular, dar estructura política e introducir una política común, cuya observación debe sentar las bases de una unión económica. Por otra parte, en cuanto al acercamiento de los diferentes sectores de la economía política, el Tratado de la Comunidad Económica Europea señalaba la posibilidad de seguir dos caminos distintos. El acercamiento se puede llevar a cabo a través de la introducción de una política común o mediante la coordinación de las políticas nacionales de los Estados miembros, consistiendo la diferencia fundamental entre ambos procedimientos en que, en el caso de una política común, como es la creación del mercado común, la responsabilidad se delega en la Comunidad Europea.

El Tratado de la Comunidad Económica Europea prescribe una política común en el campo del comercio, la agricultura, el transporte y la competencia, y prescribe una coordinación en lo que se refiere a la política económica y monetaria, cuya conformación y delineación continúa siendo competencia de los Estados miembros.

Con vistas al futuro y a los objetivos de unificación europea presentes en el Tratado, se han trazado algunos límites, si bien sólo de carácter temporal. La fusión de los intereses económicos de los Estados miembros que ha llevado consigo la formación de la Comunidad Europea debería, siguiendo la idea de sus fundadores, forjar las condiciones previas para una integración política de gran envergadura.

Como garantía de ello, se consideró en primer lugar la dinámica del proceso de integración, que debía ponerse en práctica por medio del establecimiento de una unión aduanera, de cuya evolución resultara un mercado común general.

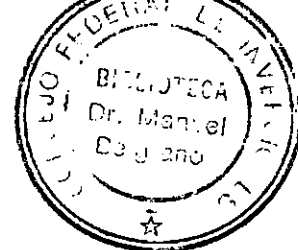
Otro elemento que debía responder a la evolución del proceso de integración, en opinión de los Estados fundadores, era la existencia de las instituciones comunitarias, creadas al constituirse la Comunidad Europea. La realización de las tareas asignadas a la Comunidad y la dirección del proceso de integración no se quiso dejar tan sólo al arbitrio o a la competencia de los Estados miembros o a la cooperación internacional, razón por la cual, con los Tratados Constitutivos de la Comunidad Europea se instauró un sistema institucional que posibilita a la Comunidad el ejercicio, en todos los campos que caen dentro de su competencia, de un derecho comunitario que obliga por igual a todos los Estados miembros.

El sistema institucional de la Comunidad Europea se encuentra estructurado de la siguiente manera:

La Comisión europea

La Comisión se compone de al menos un ciudadano de cada país de la Comunidad. Comprende actualmente 17 miembros: dos alemanes, dos españoles, dos franceses, dos italianos, dos británicos y un ciudadano de cada uno de los otros países. Los miembros de la Comisión son designados, de común acuerdo y por cuatro años, por los gobiernos de los países de la Comunidad, actúan en interés de la Comunidad únicamente, no pudiendo recibir instrucciones de ningún gobierno, estando sometidos solamente al control del Parlamento Europeo, que es el único que puede obligarles a abandonar colectivamente sus funciones. Las decisiones de la Comisión se adoptan colegiadamente, aunque de hecho, tiene lugar en el seno de la misma un reparto de las competencias.

La Comisión Europea tiene por misión:



- Asegurar el respeto a las normas comunitarias y a los principios del mercado común. Guardiana de los Tratados, la Comisión vela por la aplicación correcta de sus disposiciones, así como de las decisiones de las instituciones comunitarias. Se pronuncia sobre las demandas de los Estados miembros que quieren acogerse a las cláusulas de salvaguarda que, en casos excepcionales, permiten derogar provisionalmente las normas de los Tratados. Dispone de la facultad de investigación y puede sancionar con multas a particulares, sobre todo en el marco de las normas europeas de competencia. Es posible, en tal caso, interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ante el cual la Comisión puede igualmente hacer comparacer a los Estados que no respetan sus obligaciones.

- Proponer al Consejo de Ministros de la Comunidad todas las medidas útiles para el desarrollo de las políticas comunitarias (agricultura, energía, industria, investigación, medio ambiente, problemas sociales y regionales, comercio exterior, unión económica y monetaria, etc.).

- Poner en práctica las políticas comunitarias sobre la base de las decisiones del Consejo o, directamente, de las disposiciones de los Tratados. A este respecto, el Acta Unica, que reforma los Tratados europeos, prevé que, salvo excepción, el Consejo confiere a la Comisión las competencias de ejecución de las normas que éste establece. En determinados casos, el ejercicio de dichas competencias puede adoptar las modalidades que organizan la colaboración y la consulta de expertos nacionales.

La Comisión dispone de poderes propios, particularmente amplios en sectores tales como los del carbón y el acero (coordinación de las inversiones, control

de los precios, etc.), de la competencia (represión de monopolios y control de ayudas públicas) y de la energía nuclear (aprovisionamiento de materias fisibles, control de las instalaciones nucleares, etc.).

En los demás casos, la Comisión actúa por mandato del Consejo, por ejemplo, para negociar acuerdos comerciales con terceros países, o para administrar los mercados agrícolas.

La Comisión, finalmente, administra los fondos y los programas comunes que absorben lo esencial del presupuesto comunitario y que deben, en especial, permitir sostener y modernizar la agricultura (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola), favorecer las reconversiones regionales, industriales y profesionales, así como la contratación de los jóvenes (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, créditos CECA, Fondo Social), promover la investigación científica (programa marco de investigación y desarrollo tecnológico, Centro Común de Investigación) y afirmar la solidaridad de Europa respecto al Tercer Mundo (Fondo Europeo de Desarrollo, programas de ayuda alimentaria, etc.).

La Comisión dispone de una administración, que comprende alrededor de 14.000 funcionarios, repartidos en una veintena de direcciones generales. El 20 % del personal se ocupa de trabajos lingüísticos derivados del reconocimiento, en pie de igualdad, de los nueve idiomas de la Comunidad.

El Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros es el encargado de fijar las principales políticas de la Comunidad y está compuesto por los ministros de los Estados miembros, cada uno de los

cuales asume la presidencia por turno cada seis meses. Los participantes cambian en función del orden del día: los ministros de Agricultura tratan, por ejemplo, del nivel de los precios agrícolas, los ministros de Trabajo y de Economía, de los problemas del empleo. Los ministros de Asuntos Exteriores garantizan la coordinación del trabajo más especializado de sus colegas y con motivo de las sesiones del Consejo y de reuniones específicas, desarrollan igualmente su cooperación política relativa a los grandes problemas de política internacional.

Por otro lado, desde 1975, un Consejo Europeo reúne dos o tres veces al año a los jefes de Estado o de gobierno, así como al presidente de la Comisión, asistidos por los ministros de Asuntos Exteriores y por un miembro de la Comisión. El Consejo trata de los asuntos comunitarios, así como de la cooperación política, cumple una función de orientación y de impulsión que no debe subestimarse, aunque no produzca directamente actos jurídicos.

El Consejo de Ministros es asistido por:

- El Comité de Representantes Permanentes (Coreper), que coordina los trabajos preparatorios de las decisiones comunitarias, consumadas en las numerosas reuniones de altos funcionarios de los Estados miembros.

- Una secretaría general, cuyos servicios cuentan con alrededor de 2.000 funcionarios.

Las propuestas que ha estudiado el Consejo de Ministros sólo pueden emanar, salvo excepciones, de la Comisión y no puede rechazarlas sino por unanimidad.

Se requiere también la unanimidad en el seno del Consejo para determinadas decisiones importantes. En la práctica, los ministros la buscan con frecuencia, aunque

nada lo impone, lo que hace más lento el proceso de decisión comunitario. La Comisión europea ha insistido siempre para que se recurra con más frecuencia a la posibilidad, establecida por los Tratados, de la votación por mayoría cualificada de 54 votos sobre 76. Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido disponen de 10 votos cada uno, España de 8, Bélgica, Grecia, los Países Bajos y Portugal de 5, Dinamarca e Irlanda de 3 y Luxemburgo de 2. Con el fin de reforzar la eficacia del proceso de decisión comunitario, el Acta Unica, que enmienda los Tratados europeos, ha ampliado el voto mayoritario a determinadas decisiones que afectan en particular a la consecución del mercado interior europeo, la investigación y la tecnología, la política regional y el mejoramiento de los centros de trabajo.

El Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia de la Comunidad está formado por trece jueces, asistidos por seis abogados generales. Unos y otros son nombrados por un período de seis años, por común acuerdo de los gobiernos de los Estados miembros. Su independencia está garantizada. El tribunal tiene por misión:

- Anular, a petición de una institución comunitaria, de un Estado particular directamente afectado, los actos de la Comisión, del Consejo de Ministros o de los gobiernos, que sean incompatibles con los Tratados.

- Pronunciarse, a petición de un tribunal nacional, sobre la interpretación o la validez de las disposiciones del derecho comunitario. Cada vez que un proceso ponga de manifiesto una impugnación a este respecto, las jurisdicciones nacionales pueden pedir al Tribunal una decisión previa al juicio, debiendo hacerlo cuando ya no

haya otra instancia de apelación en el Estado miembro considerado.

- Hay que hacer notar que el Tribunal puede ser requerido para que emita dictámenes que serían entonces de apremio sobre los Convenios que la Comunidad contempla celebrar con terceros países. Por otro lado, en virtud del Acta Unica, un tribunal europeo de primera instancia es competente desde ahora para conocer de determinados asuntos, en particular, en materia de competencia.

Con sus sentencias e interpretaciones, el Tribunal de Justicia favorece la aparición de un verdadero derecho europeo, que se impone a todos: instituciones comunitarias, Estados miembros, tribunales nacionales y simples particulares. La autoridad de los fallos del Tribunal, en el campo del derecho comunitario, prevalece, en efecto, sobre la de los diversos tribunales nacionales. Y, en los casos de carencia del Consejo o de los Estados miembros, el Tribunal, cuando personas particulares han interpuesto recursos ante él, ha tenido que reconocer, por ejemplo, los efectos directos contra los principios establecidos en los Tratados de igualdad de remuneración entre el hombre y la mujer y del libre ejercicio de las profesiones liberales en el conjunto de la Comunidad.

El Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo es elegido por sufragio universal desde Junio de 1979. Cuenta actualmente con 518 diputados, elegidos cada cinco años: 81 diputados proceden de cada uno de los cuatro países más poblados Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, 60 de España, 25 de los Países Bajos, 24 de Bélgica, Grecia y Portugal, 16 de Dinamarca, 15 de Irlanda y 6 de Luxemburgo. Cuenta con 18 comisiones que preparan los trabajos de las sesiones

plenarias. Los diputados europeos ocupan sus escaños por grupos políticos y no por nacionalidad.

Desde su elección por sufragio universal, el Parlamento ha fortalecido notablemente su autoridad. Su actuación abarca varios ámbitos. Podemos distinguir:

- Su función legislativa: participa en la elaboración de las directivas, reglamentos y decisiones comunitarias, pronunciándose sobre las propuestas de la Comisión, que ésta puede modificar para tener en cuenta la postura del Parlamento. El Acta Unica, que ha revisado los Tratados europeos, ha previsto un procedimiento de cooperación entre el Consejo y el Parlamento que refuerza los poderes legislativos del mismo en un gran número de materias, tales como la consecución del mercado interior europeo, que es el objetivo para 1992.

De este modo, el Parlamento puede modificar principalmente la "postura común" del Consejo sobre una propuesta de la Comisión. Si la Comisión recoge las enmiendas del Parlamento, el Consejo, que debe resolver en el plazo de tres meses (cuatro como máximo con el acuerdo del Parlamento), no puede rechazarlas salvo si es por unanimidad. Dicha unanimidad se requiere igualmente cuando el Consejo quiere imponer sus puntos de vista, en caso de que el Parlamento haya rechazado su "postura común".

El procedimiento de cooperación, por lo tanto, ha ampliado considerablemente el margen de maniobra política del Parlamento y su influencia sobre la legislación comunitaria.

Por otro lado, en el marco de otro procedimiento de cooperación, el Consejo y el Parlamento pueden entablar una negociación, con miras a aproximar sus puntos de vista

sobre los textos que tengan una incidencia financiera importante.

Por último, el Acta Unica somete la celebración de los acuerdos internacionales y toda nueva ampliación de la Comunidad a la ratificación (dictamen de conformidad) del Parlamento.

- Su función presupuestaria: el Parlamento adopta el presupuesto de la Comunidad, salvo que decida rechazarlo, lo cual se ha producido en dos oportunidades y en ese caso, todo el procedimiento presupuestario tiene que volver a empezar.

Preparado por la Comisión, el presupuesto va y viene entre el Consejo y el Parlamento, las dos instituciones que constituyen la autoridad presupuestaria. Para los gastos llamados "obligatorios" -en su mayoría los gastos agrícolas- la última palabra la tiene el Consejo. Para los demás gastos -los "no obligatorios"-, el presupuesto regresa al Parlamento, que puede modificarlos en las condiciones que fijan los Tratados.

El Parlamento no ha dejado nunca de utilizar sus poderes presupuestarios para influir sobre las políticas comunitarias. Esta voluntad, y la amenaza de asfixia que ha hecho pesar sobre el presupuesto el tope de recursos propios desde hace tiempo, explican que el procedimiento presupuestario haya estado a menudo salpicado de conflictos con el Consejo.

- Su papel de impulsión política: aunque más difuso que las funciones legislativa y presupuestaria, la función de impulsión política del Parlamento no es por ello menos esencial. Representando a 324 millones de ciudadanos, foro europeo por excelencia, surcado por las sensibilidades

políticas y nacionales de los Doce, el Parlamento es, de forma natural, un lugar de iniciativa. Exige regularmente desarrollar o lanzar nuevas políticas o influir en las existentes. De este modo, el proyecto de tratado de la Unión Europea, que el Parlamento adoptó en 1984, ha sido el catalizador decisivo que ha conducido a los gobiernos a la firma del Acta Unica.

- Su misión de control: el Parlamento tiene la facultad de hacer dimitir a la Comisión adoptando una moción de censura por una mayoría de dos tercios (no lo ha hecho hasta ahora). Se pronuncia sobre su programa y le dirige sus observaciones.

Controla la buena marcha de las políticas comunitarias basándose, en particular, en los informes del Tribunal de Cuentas. Controla igualmente la gestión diaria de dichas políticas, planteando preguntas orales y escritas a la Comisión y al Consejo.

Los ministros de Asuntos Exteriores, responsables de la cooperación política de los Doce, responden igualmente a las preguntas de los diputados. Rinden cuentas, cada tres meses, de su acción y del curso dado a las resoluciones adoptadas por el Parlamento en los ámbitos de las relaciones internacionales y de los derechos humanos.

Por último, la costumbre requiere que el Presidente en ejercicio del Consejo Europeo informe al Parlamento de los resultados obtenidos por dicha instancia.

El Comité Económico y Social y el Comité Consultivo de la CECA

Antes de que una propuesta de la Comisión sea adoptada por el Consejo, ésta se transmite, para dictamen, no solamente al Parlamento Europeo, sino también, en la

mayoría de los casos, al Comité Económico y Social de la Comunidad, órgano consultivo de 189 miembros. El Comité comprende representantes de los empresarios, los sindicatos obreros y otros numerosos grupos de interés, como los agricultores y los consumidores.

En cuanto a las cuestiones relativas al carbón y al acero, éstas se someten al Comité Consultivo de la CECA, formados por representantes de los productores de esos sectores, por empresarios, por trabajadores y por consumidores.

Varios órganos consultivos especializados permiten, además, asociar al desarrollo de la Comunidad los círculos profesionales y sindicales. Los dirigentes de sus confederaciones europeas y sus expertos son, por otra parte, consultados con frecuencia por la Comisión, antes de formular sus propuestas de forma definitiva.

El Tribunal de Cuentas

La ejecución del presupuesto está controlada por el Tribunal de Cuentas, compuesto de doce miembros, designados de común acuerdo por el Consejo de Ministros para seis años. El Tribunal de Cuentas dispone de poderes amplios para comprobar la legalidad y la regularidad de los ingresos y gastos de la Comunidad, así como su buena gestión financiera.

Los gastos de la Comunidad (créditos de pago) se elevan a unos 44.800 millones de ecus para 1989, o sea alrededor del 1 % del producto bruto nacional de los Doce.

El presupuesto comunitario ya no se nutre de las contribuciones nacionales, sino de los recursos propios de la Comunidad:

- Los derechos de aduana y las exacciones reguladoras agrarias satisfechos por las importaciones procedentes del resto del mundo.

- Una exacción reguladora sobre la base imponible común del IVA, percibida en los países miembros.

- Un nuevo recurso creado en 1988, fundado en el producto bruto nacional de los Estados miembros.

En porcentajes del total, las principales partidas de gastos del presupuesto de 1989 son las siguientes:

- Sostenimiento de los precios agrícolas, modernización de la agricultura y la pesca: 67,0 %.

- Política regional: 9,6 %.

- Política social: 7,2 %.

- Acciones comunes en materia de investigación, energía, industria, medio ambiente y transporte: 3,4 %.

- Ayuda a los países del Tercer Mundo: 2,3 % (a lo que hay que añadir los gastos fuera de presupuesto previstos por la Convención de Lomé, que duplica las sumas disponibles).

- Gastos de funcionamiento: 4,8 %, que cubren principalmente los sueldos de los 20.600 funcionarios y agentes con que cuentan, en total, las diversas instituciones comunitarias, los inmuebles, los gastos administrativos, etc.

El Banco Europeo de Inversiones

El Tratado de Roma creó el Banco Europeo de Inversiones, que tiene por misión contribuir

financieramente al desarrollo equilibrado de la Comunidad. Obtiene lo esencial de sus recursos realizando empréstitos en los mercados de capitales, que a su vez presta, sin fin de lucro, para financiar las inversiones prioritarias para la Comunidad, contribuyendo a los objetivos siguientes: desarrollo regional, mejora de las infraestructuras de transporte y de las telecomunicaciones de interés europeo, protección del medio ambiente y del patrimonio arquitectónico o natural, ordenación urbana, reducción de la dependencia energética, refuerzo de la competitividad internacional de la industria, en particular mediante el desarrollo de tecnologías de punta y de pequeñas y medianas empresas.

El Banco Europeo de Inversiones es una institución autónoma en el seno de la Comunidad, dotado de una estructura administrativa y de órganos de decisión propios.

La Comisión obtiene otros empréstitos que le permiten conceder préstamos a favor de los sectores del carbón y del acero, así como de la energía nuclear. Aparte de estos préstamos a la inversión, la Comunidad puede conceder a sus Estados miembros préstamos sometidos a condiciones de política económica y destinados al sostenimiento de sus balanzas de pagos. Con el fin de que sean eficaces y se complementen, las operaciones comunitarias de empréstitos y préstamos son objeto de una coordinación entre la Comunidad y el Banco Europeo de Inversiones.

El Fondo Social Europeo

Es éste órgano institucional del Tratado de Roma, que se creó para amortiguar las posibles distorsiones de empleo provenientes de la incidencia negativa del mercado común en la vida de algunas empresas. El Fondo es administrado por la Comisión, a través de un Comité presidido por uno de sus

miembros, y del que forman parte representantes gubernamentales, empresariales y laborales de todos los Estados miembros.

La función básica del Fondo consiste en facilitar ayuda a los Estados miembros, para financiar, hasta un 50 %, las actividades que tienden a asegurar el reemplazo productivo de los trabajadores en paro. Las ayudas se materializan en actividades de reeducación profesional y en indemnizaciones de reinstalación, que tienen por objeto el mantenimiento de los ingresos normales a los trabajadores en paro temporal durante los procesos de reconversión de empresa.

Los medios del Fondo para la concesión de ayudas, proceden de las contribuciones de los Estados miembros según proporciones convenidas. En el año 1962, en el "Programa de Acción para la Segunda Etapa", la Comisión asignó al Fondo como nuevo cometido la coordinación y la orientación de la política comunitaria de empleo, concibiendo ésta como el "conjunto de directrices básicas conducentes a un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos existentes en la Comunidad, y cuya calidad y movilidad se ven afectados por la política de formación profesional y por la libre circulación de trabajadores".

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional

El Comité de Política Regional, que es la verdadera junta rectora del Fondo, tiene como misión ayudar a la Comisión y al Consejo a coordinar las políticas regionales de los Estados miembros, así como a definir los objetivos comunitarios en la misma área. Sus funciones específicas consisten en:

- Estudiar los medios de que dispone la Comunidad para reforzar la incidencia regional de sus acciones financieras, a la luz de los objetivos generales de la política regional.

- Analizar los programas de desarrollo regional elaborados por los Estados miembros.

- Comprobar los regímenes de ayuda.

- Garantizar una mejor información a los inversores públicos y privados respecto de los problemas y de las políticas de desarrollo regional.

- Estudiar las medidas nacionales de "descongestión", con el objeto de permitir la elaboración de una política comunitaria coherente.

Aparte de los fondos que, con distintos fines comunitarios se distribuyen en forma de créditos y de subvenciones por los diversos órganos comunitarios dependientes de la Comisión, en 1968 se creó una nueva fórmula financiera denominada "Nuevo Instrumento Comunitario". Son emisiones hechas por la Comisión en el mercado de capitales en Ecus, destinadas a financiar proyectos de inversión de los Estados miembros en lo relativo a infraestructura y energía.

El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola

Para la organización de sus actividades, el Fondo consta de dos secciones: una de Garantía y la otra de Orientación. La Sección Garantía se ocupa de las intervenciones en el mercado interior y de las restituciones a la exportación a terceros países. La Sección Orientación se dedica a impulsar la mejora de las condiciones de producción y de comercialización, teniendo



un carácter más estructural. La intervención del mercado interior se practica respecto a una amplia gama de productos básicos. Por su parte, la Sección Orientación nació de las inquietudes del Consejo y del deseo de la Comisión de disponer de un organismo financiero a nivel comunitario capaz de promover la modernización de las explotaciones.

Los proyectos de modernización se someten primeramente a los organismos nacionales. Si son aceptados por éstos, el trámite siguiente se produce ante las instituciones comunitarias. Después de ser aprobados (los criterios de decisión son esencialmente técnicos) el Fondo subvenciona el 25 % del proyecto (en casos excepcionales hasta el 45 %), siendo obligatoria la ayuda a nivel estatal.

Los proyectos financiados por el Fondo deben encajar en programas comunitarios. Han de definir las inversiones, los productos a obtener y la región en que se ha de realizar el programa. Algunas áreas gozan de una atención prioritaria (zonas especiales). La Comunidad dispone de poder discrecional muy amplio para examinar los programas presentados y, en definitiva, para decidir sobre las inversiones.

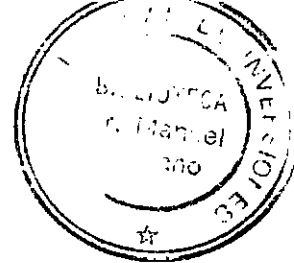
Examinado hoy el método de integración que eligieron los fundadores de la Comunidad Europea, el resultado obtenido tiene dos aspectos diferentes.

En primer lugar, se ha probado la eficacia de limitar provisionalmente el proceso de integración al sector económico. La existencia de una zona económica unitaria europea ha dado un empuje considerable al comercio entre los Estados miembros. La Comunidad Europea es hoy la mayor potencia económica del mundo junto con los Estados Unidos. También es extraordinario el papel de la Comunidad en el

comercio mundial, ya que, incluyendo el comercio intracomunitario, más de una tercera parte de todas las exportaciones e importaciones las realiza la Comunidad. Por otra parte, ha demostrado ser una sólida base de colaboración y convivencia entre los Estados miembros.

En segundo lugar, a pesar de ello, en un aspecto se han visto defraudadas las esperanzas de los fundadores de la Comunidad, debido a que no se realiza ningún progreso automático de unificación europea en la línea de los objetivos políticos a los que se aspiraba. Algunos de los Estados miembros continúan firmes en su actitud sobre la inviolabilidad del núcleo de su soberanía nacional. La atribución de mayores poderes a la Comunidad les parece un precio demasiado alto por los beneficios que prevén. Los Estados miembros se sustraen en última instancia a las presiones, derivadas de las necesidades políticas o económicas, para profundizar las políticas comunes o formular e introducir nuevas políticas, apelando a intereses nacionales vitales e interponiendo vetos.

De lo que se trata es de intentar nuevos proyectos, tomar nuevas resoluciones, consolidar lo logrado, fomentar los procesos que ya estén en marcha, corregir los errores de desarrollo y dirigir las actividades de la Comunidad Europea, tan cuidadosamente como exija la realidad, hacia el objetivo último de la unificación política. Con estas premisas, la unificación europea es, en conjunto, un reto permanente para todos los interesados. El progreso hacia ella y su realización dependen de manera decisiva de la voluntad política de los Estados miembros.



BIBLIOGRAFIA

LA UNIFICACION ECONOMICA EUROPEA

Nacimiento y desarrollo de la Comunidad Europea

Serie DOCUMENTACION EUROPEA

Año 1990

LA COMUNIDAD EUROPEA

Ramón Tamames

Año 1987

LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Serie EUROPA, NUESTRO FUTURO

Fascículo Nº 16/89

Año 1989

LAS CONSECUENCIAS DE UN PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA:

EL EJEMPLO DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Año 1990